



CONVENIO DE BASILEA

Distr.: General
16 de agosto de 2004

Español
Original: Inglés

**Conferencia de las Partes en el
Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación**

Séptima reunión

Ginebra, 25 a 29 de octubre de 2004

Tema 6 del programa provisional*

**Informe sobre la aplicación de las decisiones
adoptadas por la Conferencia de las Partes en su
sexta reunión**

Análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII

Nota de la secretaría

I. Introducción

1. Se hace referencia a la decisión III/5 del Grupo de Trabajo de composición abierta en la que el Grupo de Trabajo pidió a la secretaría que presentará el informe final del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII a la Conferencia de las Partes en su séptima reunión para que ésta adopte una decisión al respecto.

II. Aplicación

2. De conformidad con lo acordado por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su tercer período de sesiones que tuvo lugar en abril de 2004, el texto contenido en el documento UNEP/CHW/OEWG/2/7, junto con la compilación de las recomendaciones presentadas al Grupo de Trabajo de composición abierta en su tercer período de sesiones y formuladas durante ese período de sesiones, integran el informe final del análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII que se remite a la Conferencia de las Partes en su séptima reunión para su consideración.

3. El informe final del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre las cuestiones relacionadas con el anexo VII figura en el anexo de la presente nota.

*

UNEP/CHW.7/1

K0472242(S) 160904 170904

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.

III. Medida propuesta

4. Se ruega remitirse al documento UNEP/CHW.7/2, sobre la compilación de los proyectos de decisión, presentados por el Grupo de Trabajo de composición abierta a la Conferencia de las Partes para su consideración y posible adopción.

Anexo

Informe final del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII

Índice

Parte I	Análisis de cuestiones relacionadas con el anexo VII ¹	
Parte II	Compilación de las observaciones presentadas por escrito a la secretaría con antelación al tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo de composición abierta ²	4
Parte III	Observaciones formuladas durante el tercer período de sesiones del del Grupo de Trabajo de composición abierta	19
A.	Extracto del informe del tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo de composición abierta (capítulo VIII, párrafos 57 a 64)	32
B.	Observaciones revisadas del Basel Action Network (BAN).....	33

¹ Publicado previamente como anexo del documento UNEP/CHW/OEWG/2/7.

² Publicado previamente como documento UNEP/CHW/OEWG/3/INF/6.

Parte I. Análisis de cuestiones relacionadas con el anexo VIII – Fase II 15 de septiembre de 2003

Índice

I.	Mandato	5
II.	Análisis del anexo VII (1998-2002)	5
III.	Antecedentes	5
	A. Enmienda sobre la prohibición	5
	B. Parte I del análisis	6
IV.	Resultado de la fase II del análisis	6
	A. Generalidades	6
	B. Examen de los elementos de la evaluación	6
V.	Perspectivas futuras	12
	Apéndices	
I.	Mandato para la parte II del estudio sobre la aplicación de la decisión IV/8: cuestiones relacionadas con el anexo VII	14
II.	Decisiones de la conferencia de las partes sobre el anexo VII	15
III.	Fuentes utilizadas	18

I. Mandato

1. En su decisión VI/34 sobre análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII, la sexta reunión de la Conferencia de las Partes pidió a la secretaría:
 - a) Que completase la labor sobre la fase II del análisis a tiempo para la séptima reunión de la Conferencia de las Partes y que, al realizar esa labor, aprovecharse al máximo la información existente y recabase toda otra información que considerase necesaria;
 - b) Que presentase el primer proyecto del análisis a una reunión del órgano subsidiario adecuado en 2003, y que presentase la versión definitiva del análisis a tiempo para que pudiese ser examinada en la última reunión de ese órgano, antes de presentarla para que la Conferencia de las Partes adopte una decisión final en su séptima reunión.
2. En la misma decisión, la Conferencia de las Partes pidió, entre otras cosas, al Grupo de Trabajo de composición abierta que presentase su informe definitivo sobre el análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII a la Conferencia de las Partes en su séptima reunión.

II. Análisis del anexo VII (1998-2002)

3. En la decisión VI/8, aprobada en 1998 en su cuarta reunión, la Conferencia de las Partes decidió estudiar cuestiones relacionadas con el anexo VII y pidió a sus órganos subsidiarios, concretamente al Grupo de Trabajo Técnico que, trabajando en cooperación con el Subgrupo de expertos jurídicos y técnicos proporcionase a las Partes un análisis detallado y documentado que expusiese las cuestiones relacionadas con el anexo VII.
4. En la decisión V/4, aprobada en 1999 en su quinta reunión, la Conferencia de las Partes acogió con beneplácito el informe preparado por la secretaría sobre la fase I del análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII y aceptó los ocho elementos de evaluación para la segunda fase del análisis.
5. El informe sobre la parte II del estudio sobre la aplicación de la decisión IV/8: Cuestiones relacionadas con el anexo VII se finalizó en mayo de 2001. En su segunda reunión conjunta celebrada en mayo de 2002, los grupos de trabajo técnico y jurídico acordaron que la secretaría completase en la medida de lo posible la labor sobre la fase II del análisis y presentase los resultados a la Conferencia de las Partes en su sexta reunión. En su sexta reunión, la Conferencia de las Partes aprobó la decisión VI/34 sobre la cuestión.
6. Los elementos de evaluación, en su forma adoptada por la Conferencia de las Partes para la fase II figuran en el anexo I del presente proyecto de análisis.

III. Antecedentes

A. Enmienda sobre prohibición

7. En su tercera reunión celebrada en 1995, la Conferencia de las Partes adoptó la decisión III/1, sobre una enmienda al Convenio de Basilea. La enmienda que figuraba en la decisión III/1 entrará en vigor cuando haya sido ratificada por tres cuartos de las Partes presentes en el momento de adopción de la enmienda, es decir, 62 Partes³. Entre las cuestiones más frecuentemente planteadas por las Partes con respecto a la aplicación de la enmienda sobre prohibición figuran:
 - a) Falta de coherencia acerca del concepto de manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos;

³ En agosto de 2003 había 37 ratificaciones de la enmienda; entre las Partes que ratificaron la enmienda figuran 30 Partes presentes y votantes en el momento en que se adoptó la decisión III/1.

- b) Posibles efectos económicos, en particular, en relación con los desechos peligrosos destinados a operaciones de recuperación;
- c) Falta de actividades de creación de capacidad; y
- d) La relación con otros sistemas de control mundiales o regionales que regulan los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, y con acuerdos comerciales.

B. Parte I del análisis

8. La parte I del análisis consistió principalmente en un ejercicio de recopilación de datos e información realizado entre marzo y mayo de 1999. Las tareas de la parte I del análisis fueron las siguientes:

- a) Evaluación mundial de los movimientos transfronterizos de desechos entre los países incluidos en el anexo VII, entre los países que no están incluidos en el anexo VII, y entre países que están incluidos en ese anexo y los que no lo están;
- b) Examen de todas las corrientes de desechos que se envíen, como resultado de la prohibición de exportar desechos peligrosos aplicada por las Partes;
- c) Análisis de los datos estadísticos existentes, incluidos los facilitados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la secretaría del Convenio de Basilea, sobre el comercio y el tráfico mundial de desechos, el comercio de productos reciclables y de la capacidad correspondiente, y sobre la generación de desechos peligrosos, en la medida de lo posible; y
- d) Análisis de las normas aplicables en los países que pertenecen a la OCDE, y los países que no pertenecen a esa organización.

9. La parte I del análisis expuso las dificultades encontradas en la recopilación de los datos e información requeridos de las Partes para los años 1993-1996. La recopilación de datos con arreglo a los artículos 13 y 16 sobre la exportación e importación de desechos peligrosos ha mejorado notablemente desde 1998 y actualmente puede proporcionarse información cuantificable.

IV. Resultado de la fase ii del análisis

A. Generalidades

10. Al examinar los resultados de la labor sobre la fase II del análisis, las Partes y otros interesados directos reconocieron que existían opiniones divergentes sobre la conclusión del análisis, que el análisis seguía siendo no concluyente y que completarlo requeriría una importante cantidad de esfuerzos y recursos, y que el progreso realizado en el análisis no era suficiente para ayudar a las Partes en el proceso de ratificar y aplicar la enmienda que figuraba en la decisión III/1.

B. Examen de los elementos de la evaluación

11. De la labor realizada en la fase II del análisis se dedujeron varias cuestiones importantes. Se examinan en las siguientes secciones 1 a 5.

1. Examen de las consecuencias del anexo VII en lo que se refiere a los aspectos ambientales, económicos y de otra índole

12. Varias Partes han señalado la falta de una definición clara y acordada del concepto de manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos como una de las dificultades con que se tropieza al examinar las consecuencias del anexo VII. Se trató de comparar las definiciones o enfoques de manejo ambientalmente racional existentes a nivel internacional con los del Convenio de Basilea y, a partir de esta comparación, elaborar una serie de indicadores para el manejo ambientalmente racional que creasen un marco en el que examinar la ejecutoria de un país. Este método no llega a proporcionar la información necesaria para examinar los aspectos ambientales, económicos y de otro tipo del anexo VII

y puso de relieve las dificultades experimentadas para elaborar un análisis basado en la experiencia práctica.

13. Las Partes han llegado a un acuerdo sobre una serie de principios rectores del manejo ambientalmente racional que conviene examinar con respecto a los movimientos transfronterizos. En particular, han llegado al acuerdo de que debería considerarse el principio de autosuficiencia con el principio de proximidad y el principio de movimientos transfronterizos mínimos, reconociendo que la aplicación de dichos principios variará según los países. Sobre la base de estos principios, el tratamiento o eliminación de desechos peligrosos tendría lugar lo más cerca posible de su punto de generación; ahora bien, en algunos casos, el manejo ambientalmente racional y eficaz de ciertos productos peligrosos puede lograrse en instalaciones especializadas situadas en otro país.

14. La mayor parte de las corrientes comerciales importantes existentes a nivel internacional de materiales reciclables no pueden clasificarse en el anexo VIII del Convenio (lista de desechos caracterizados como peligrosos de conformidad con el apartado a) del párrafo 1 del Convenio). En un estudio realizado por el Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc, una organización intergubernamental, sobre las repercusiones relacionadas con el anexo VII sobre el comercio del plomo y del zinc (www.ilzsg.org), que se finalizó en 1997, se formulan las siguientes observaciones:

a) En el caso del zinc, excepto las cenizas y residuos de zinc que presentan características peligrosas, el Convenio de Basilea clasifica otras categorías como materiales de la lista B de que figura en el anexo IX. El volumen de cenizas de zinc que presentan características peligrosas es un pequeño porcentaje del total;

b) En el caso del plomo, a más largo plazo, las repercusiones son más complejas, en particular en lo que respecta a la competitividad entre los países incluidos en el anexo VII y los no incluidos en dicho anexo. Básicamente, los recicladores incluidos en el anexo VII podrían resultar más competitivos que los no incluidos en dicho anexo.

15. La cantidad total de desechos peligrosos generados a nivel mundial anualmente por las actividades industriales o por otro tipo de actividades que generan desechos, de acuerdo con la clasificación del Convenio de Basilea, sigue siendo aproximada y sujeta a cálculos variables⁴. Ha resultado difícil establecer objetivos cuantitativos a nivel internacional para reducir al mínimo la producción de desechos peligrosos a escala mundial. En la decisión V/14 (transmisión de información), la Conferencia de las Partes pidió a la secretaría que estudiase las posibilidades de elaborar indicadores sobre desechos peligrosos a fin de facilitar la adopción de decisiones. Actualmente podrían facilitarse a nivel nacional algunos objetivos de minimización de desechos peligrosos. En relación con el anexo VII, no se dispone de información que proporcione una indicación del grado y tipo de industrialización y, en este contexto, la índole de las actividades industriales, incluidas las tecnologías y procesos que producen desechos peligrosos en los países incluidos en el anexo VII y en los países no incluidos en dicho anexo.

2. Evaluación del marco institucional y jurídico para la aplicación de la decisión III/1

16. En el análisis se han determinado los elementos de una infraestructura jurídica e institucional que deberían existir, en condiciones ideales, a nivel nacional para aplicar el Convenio de Basilea y su enmienda. Se observa además, que solamente un reducido número de Partes cuentan con todos los elementos necesarios y que la capacidad de las Partes para aplicar el Convenio y su enmienda eficazmente depende de su nivel de desarrollo infraestructural y económico⁵. La falta de legislación sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos o de reglamentos sobre requisitos para el manejo ambientalmente racional, junto con la ausencia de definiciones y clasificación armonizadas de desechos peligrosos entre los países, plantean obstáculos prácticos a la aplicación de la decisión III/1.

17. Se observan notables diferencias entre los países no incluidos en el anexo VII en lo que se refiere a su capacidad para manejar desechos peligrosos. Entre los países no incluidos en el anexo VII figuran algunos países con capacidad para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos y de otros desechos. En este caso, la capacidad para el manejo ambientalmente racional es con frecuencia

⁴ Se han registrado importantes mejoras desde 1998 en la recopilación, fiabilidad y tratamiento de los datos proporcionados por las Partes con arreglo a los artículos 13 y 16.

⁵ Véase la sección B del documento UNEP/CHW/TWG/18/INF/3, de 29 de mayo de 2001.

específica para determinadas corrientes de desechos peligrosos. Hay países que cuentan con parte de la infraestructura básica necesaria en apoyo del manejo de los desechos peligrosos, incluido el necesario marco jurídico e institucional, pero que carecen todavía del personal especializado y de los recursos financieros para conseguir el manejo ambientalmente racional. Otro grupo de países han invertido solamente recursos limitados en la infraestructura para el manejo de los desechos peligrosos, aunque se encuentran en un proceso de intenso desarrollo industrial. Otros podrían clasificarse como países menos adelantados con infraestructura mínima. Aunque existe una diferencia menos marcada en la ejecución del manejo de desechos entre los países incluidos en el anexo VII, algunos de estos países, en particular los países con economías en transición que son miembros de la OCDE, están todavía elaborando o reforzando su infraestructura de manejo de desechos y su capacidad de recuperación y reciclado. Cabe señalar que la capacidad de manejo ambientalmente racional de algunos de los países incluidos en el anexo VII puede reducirse también a ciertas corrientes específicas de desechos peligrosos.

3. Evaluación de las consecuencias derivadas del anexo VII en relación con las obligaciones de los países de reducir la generación y el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos; las actividades y resultados actuales de los programas de minimización de desechos; e infraestructura de manejo de desechos

18. El informe de una empresa de consultores señala que la enmienda que figura en la decisión III/1 podría preverse que ofreciese nuevos incentivos para adoptar métodos de producción más limpios y reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos en los países incluidos en el anexo VII. También cabría esperar que la enmienda estimulase las actividades de los países incluidos en el anexo VII para ser autosuficientes en lo que se refiere a la eliminación de desechos peligrosos. Se observa por último que los efectos ambientales de la enmienda en los países no incluidos en el anexo VII requiere un análisis más detallado. Como parte del análisis se ha elaborado una matriz conceptual, en la que se muestran los efectos probables que teóricamente cabría esperar de la enmienda. Además, se ha establecido una referencia inicial en relación con la situación actual. Al mismo tiempo en el análisis se concluye que, en esta etapa temprana, solamente es posible formular pronósticos teóricos o ab initio en cuanto a los posibles efectos de la enmienda en los países incluidos en el anexo VII.

19. Según la información proporcionada por las Partes con arreglo al artículo 13⁶, la cantidad de desechos peligrosos objeto de movimientos transfronterizos crece continuamente. Con arreglo a esta tendencia, hay un aumento de los desechos peligrosos destinados a la recuperación o al reciclado, mientras que el volumen de desechos peligrosos destinados a la eliminación definitiva disminuye. Se registra también un aumento de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos entre los países no incluidos en el anexo VII, así como entre los países incluidos en el anexo VII para recuperación y reciclado. La misma tendencia se registra en la generación de desechos peligrosos, fenómeno que aumenta rápidamente tanto a nivel nacional como mundial. Los movimientos transfronterizos, según los informes presentados con arreglo al Convenio de Basilea, son predominantemente desechos que contienen metales (Y31, Y22, Y23) y desechos que contienen disolventes (Y42).

20. En esta etapa, cabe destacar que cualquier consecuencia del anexo VII puede describirse únicamente para casos específicos y sería irracional convertirlas en generalizaciones. Las características sociales, económicas, ambientales, geográficas o climáticas específicas de países o regiones impiden dicha generalización, en particular, teniendo en cuenta la falta de datos primarios, su compatibilidad o exactitud. Además, en vista de las ambigüedades en las clasificaciones de desechos a nivel nacional, en particular, con respecto a desechos tales como la chatarra de zinc, las cenizas de zinc, el peltre de zinc duro o la chatarra de cobre y compuestos, debe procederse con precaución.

21. Se describen a continuación dos casos documentados⁷:

a) Caso 1: Un país no incluido en el anexo VII que posee yacimientos de plomo llegó a la conclusión de que no era económico explotarlos. Dicho país creó una industria de recuperación de plomo a finales de la década de los años 1980. El suministro nacional de plomo mediante fuentes secundarias no era suficiente para garantizar una utilización viable y eficiente de las fundiciones de

⁶ Véase la recopilación correspondiente al año 2000 con arreglo al artículo 13 (presentación de informes nacionales).

⁷ Información recogida de publicaciones oficiales.

plomo. Como consecuencia, el país importó acumuladores de plomo principalmente de un solo origen de un país incluido en el anexo VII a partir de 1994. Otros países no incluidos en el anexo VII de la región estaban haciendo lo mismo. En el proceso de enmienda del derecho ambiental, la asamblea legislativa de dicho país pidió la prohibición de las importaciones de desechos peligrosos, con excepción de los acumuladores usados, hasta el año 2002. Los acumuladores usados se eximieron de la prohibición porque el suministro de fuentes nacionales era insuficiente para lograr un nivel de producción económico y todavía era necesario importar acumuladores usados hasta que la oferta local pudiese satisfacer las necesidades económicas. Mientras tanto, el país incluido en el anexo VII (principal fuente de acumuladores usados) dejó de exportar acumuladores de plomo usados, atendiendo a la decisión III/1. Desde 1998 los acumuladores usados se importan principalmente de países no incluidos en el anexo VII. Mientras tanto, los progresos realizados en el fomento y mejora de la recogida de acumuladores usados a nivel local siguen siendo lentos. Además, los recicladores en pequeña escala que cumplen los requisitos ambientales y sanitarios del país operan todavía ilegalmente;

b) Caso 2: Un país no incluido en el anexo VII ha restringido la importación de desechos de zinc en algunos casos en 1994 y ha prohibido la importación de escorias que contengan plomo y zinc en 1996. Como resultado, la producción nacional de su industria secundaria del zinc ha disminuido enormemente. Experimentó dificultades análogas la industria del plomo, llegándose al cierre de uno de sus principales productores de plomo. El creciente déficit en el suministro de zinc y de plomo indujo al gobierno a revisar su política de importaciones y a permitir un tratamiento más amplio de acumuladores de plomo usados procedentes del suministro nacional. En 1999 el gobierno decidió permitir la importación de cenizas y escorias de zinc, pero solamente a los productores secundarios de zinc que satisfacen normas ambientales adecuadas.

4. Evaluación de la asistencia para la creación de capacidad a países no incluidos en el anexo VII

22. Según este elemento de evaluación, se realizó un análisis de los medios para aplicar el párrafo 21 del preámbulo del Convenio de Basilea, que estipula la prestación de asistencia a los países que no están incluidos en el anexo VII (creación de capacidad) para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos y otros desechos generados en sus países, incluida la prestación de asistencia financiera y técnica.

23. El artículo 10 del Convenio de Basilea ofrece un marco para la asistencia técnica con el fin de ayudar a las Partes a crear sus capacidades nacionales para el manejo de desechos peligrosos, generados localmente o importados, de un modo ambientalmente racional. La secretaría ha organizado varios seminarios y cursos prácticos para los países en desarrollo y los países con economías en transición sobre diferentes aspectos del manejo de desechos peligrosos. Se han celebrado reuniones regionales en las que se han intercambiado conocimientos y experiencias entre los países, cuyos resultados se han perfeccionado ulteriormente mediante la realización de seminarios o cursos prácticos nacionales. Además, la secretaría presta asistencia a las Partes en la elaboración de metodologías para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos y en apoyo de su capacidad institucional. Los centros regionales del Convenio de Basilea representan mecanismos regionales potenciales para facilitar el acceso a conocimientos, tecnologías y conocimientos especializados eficaces.

24. Se están investigando métodos para fortalecer el enfoque de múltiples interesados y crear la relación apropiada entre los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, los sectores público y privado y otras organizaciones no gubernamentales para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos y otros desechos, comprendida su reducción al mínimo, incluidas las posibilidades de establecer asociaciones con la industria. Se están examinando enfoques nuevos y alternativos para financiar las actividades de creación de capacidad para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos. Entre ellos figuran cauces multilaterales y bilaterales de cooperación para el desarrollo. La Declaración de Basilea sobre el manejo ambientalmente racional brinda oportunidades para aumentar el apoyo a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para la elaboración o mejorar el manejo de desechos peligrosos, incluida la reducción al mínimo de su generación. En su sexta reunión, celebrada en diciembre de 2002, la Conferencia de las Partes adoptó el Plan Estratégico para la Aplicación del Convenio de Basilea hasta 2010. En el Plan Estratégico se incorpora el principio de responsabilidad común pero diferenciada.

5. Análisis de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente asociados con la eliminación, el reciclado o la recuperación de desechos peligrosos y de los indicadores para evaluar el riesgo

25. Los objetivos de la labor en relación con este elemento son investigar los conocimientos actuales de los peligros y riesgos que comportan los desechos peligrosos; además de examinar metodologías que podrían utilizarse para profundizar en los conocimientos de las situaciones en las que podrían plantearse riesgos. Una empresa de consultores ha realizado un examen preliminar de la bibliografía disponible mediante una firma consultora con el fin de recopilar información sobre:

a) La labor realizada por las organizaciones internacionales, nacionales e industriales que realizan investigaciones sobre cuestiones de salud, seguridad y medio ambiente relacionadas con los desechos peligrosos; y

b) Los riesgos y posibles efectos sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente que plantean el reciclado, la recuperación de recursos y la eliminación de desechos peligrosos.

26. Se propusieron ulteriormente una metodología simplificada para evaluar los riesgos para la salud y el medio ambiente derivados de la exposición a desechos peligrosos concretos y un futuro proyecto de investigación colaborativo, con participación de la secretaría, para perfeccionar esa metodología.

27. La eliminación de desechos representa un riesgo potencial para la salud, en particular si se manejan inadecuadamente. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con la salud, o tal vez todas, registradas en los países incluidos en el anexo VII podrían aplicarse a los países no incluidos en el anexo VII, pero en estos últimos los niveles de riesgos podrían multiplicarse si no se cuenta con capacidad y los recursos financieros y la infraestructura son inadecuados, o las instalaciones inapropiadas para garantizar medidas de protección eficaces y el control o la evitación de la contaminación; figuran entre estos los riesgos ocupacionales para la salud para los residentes y los trabajadores. Dichos riesgos pueden ser resultado de un manejo inadecuado de los desechos peligrosos nacionales e importados y de los desechos no peligrosos. Además, podría resultar afectada la salud de las personas que viven en las cercanías de los lugares de eliminación de desechos peligrosos. Productos químicos peligrosos contenidos en los desechos pueden incorporarse a la cadena alimentaria de personas y animales y pueden contaminar el agua potable. Dicha situación podría ser especialmente dramática cuando los emplazamientos contaminados están situados cerca de zonas ocupadas por comunidades pobres o en ellas.

28. Es necesaria todavía una importante labor para documentar los efectos en general sobre la salud humana del manejo de los desechos peligrosos y los riesgos asociados incluso cuando las operaciones de eliminación se supone que satisfacen normas adecuadas. Además, el tráfico ilícito de desechos y desechos peligrosos es probable que plantee riesgos para la salud humana. Aunque existe un gran acervo de conocimientos diseminados, los riesgos potenciales derivados de ciertos tipos de desechos no están plenamente documentados. La labor actual que se está realizando en el contexto del Convenio de Basilea sobre las características de peligro de los desechos incluidos en el anexo III ayudará a mejorar los conocimientos en esta esfera.

6. Evaluación de las medidas adoptadas para aplicar la decisión III/1

29. En este elemento de evaluación se incluía, entre otras cosas, la relación entre la decisión III/1 y los acuerdos internacionales relativos a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Se realizó una evaluación de los progresos logrados en la prestación de asistencia a las Partes para ratificar la enmienda.

30. Como parte del proceso de ratificación o adhesión al Convenio de Basilea, varios países pidieron a la secretaría aclaraciones en cuanto a la ratificación de la enmienda que figuraba en la decisión III/1. Basándose en parte en la labor realizada por la secretaría en cooperación con los centros regionales del Convenio de Basilea destinada a promover la ratificación de la enmienda, algunos países, además de su evaluación interna o nacional, han adoptado medidas para ratificar la enmienda por separado o al mismo tiempo que ratificaban o se adherían al Convenio. Este enfoque ha proporcionado una noción, a posteriori, de algunas de las medidas jurídicas e institucionales adoptadas por los países para aplicar la decisión III/1. Además, varias Partes han adoptado medidas técnicas, jurídicas y de otro tipo (en relación, por ejemplo, con la información) para asegurar que los interesados pertinentes y, en

particular, los operadores, se atenían al objetivo de la enmienda debidamente. Hasta este momento, no se ha desarrollado ninguna labor sistemática o amplia para realizar una evaluación profunda y fundamentada de las medidas adoptadas para aplicar la decisión III/1. Se está acumulando gradualmente un conjunto de conocimientos y experiencias en esta esfera, en particular mediante las iniciativas adoptadas por los centros regionales del Convenio de Basilea.

31. Con respecto a la relación con acuerdos internacionales, es importante que las Partes adopten medidas para evitar discrepancias entre los diferentes regímenes jurídicos que controlan los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos o están relacionados con los mismos. A este respecto son de importancia dos tipos de acuerdos internacionales⁸. En el primer tipo figuran los acuerdos ambientales multilaterales, tanto a escala mundial, como el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, como acuerdos regionales clave, en particular, la Convención de Bamako sobre la prohibición de la importación a África, la fiscalización de los movimientos transfronterizos y la gestión dentro de África de desechos peligrosos, la Convención de Waigani de prohibición de la importación a los países insulares del foro de desechos peligrosos y radiactivos y sobre el control y ordenación de desechos peligrosos dentro de la región del Pacífico meridional y los acuerdos y planes de acción regionales. Entre los otros tipos de acuerdos figurarían el Convenio de Londres sobre la prevención de la contaminación marina por vertimiento de desechos y otras materias (Convenio de Londres, 1972), aprobado bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI), los acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los reglamentos o actas de la OCDE y el Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Además, es de particular importancia la relación de la enmienda con las Recomendaciones Modelo de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercaderías peligrosas y el Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

7. Evaluación de la relación costo-beneficio y de la eficacia del reciclado de desechos peligrosos frente a los riesgos para la salud y los daños ambientales

32. Existen cuatro esferas en las que podrían registrarse costos y beneficios en relación con la exportación de desechos peligrosos para el reciclado: el medio ambiente, la salud, el comercio y la economía. Como primera medida, se ha realizado un estudio de la bibliografía con el fin de recopilar diferentes opiniones sobre las probables consecuencias de la enmienda en estas cuatro esferas, para analizarlas y, sobre la base de los resultados, elaborar un instrumento para la evaluación detallada que podría aplicarse una vez que se hayan determinado los costos y beneficios de operaciones específicas de reciclado de desechos peligrosos en casos concretos.

33. El comercio internacional en chatarra y residuos metálicos representa una fuente importante de suministro para las industrias tanto en los países incluidos en el anexo VII como en los no incluidos en dicho anexo. Los países incluidos en el anexo VII y los no incluidos en el mismo no siempre pueden permitirse construir u operar complejos sistemas industriales para la recuperación de muchos materiales. Algunas de las operaciones son más contaminantes que otras y pueden dar como resultado la contaminación del medio ambiente. Por un lado, la recuperación o reciclado de desechos que contienen metales por el sector extraoficial se considera que es una fuente importante de contaminación. Las Partes y otros interesados han determinado el reciclado fraudulento como problema grave, que afecta, en particular, a los países en desarrollo y a los países con economías en transición. Por otro lado, muchos estudios han demostrado que la recuperación o el reciclado racionales conducen a ahorro de recursos y reducción de emisiones y desechos. Los operadores con acceso al mercado internacional pueden trabajar con tecnologías más modernas y limpias que los excluidos de dicho mercado.

34. En la última década, los volúmenes de comercio internacional han aumentado mucho más rápidamente que la producción. Esto es de aplicación a las materias primas y a los productos elaborados, así como a las materias primas secundarias. En comparación con las materias primas primarias, se exporta una mayor proporción de materias primas secundarias de los países incluidos en el anexo VII que importan los países no incluidos en el anexo VII; muchos países no incluidos en el anexo VII se han especializado en la utilización de materias primas secundarias, mientras que muchos países

⁸ Véase el documento UNEP/CHW.6/31 sobre cooperación internacional, de 10 de octubre de 2002.

incluidos en el anexo VII se han especializado en la recogida y tratamiento de materiales recuperables o reciclables⁹. El manejo racional de los residuos derivados de la recuperación, reciclado, trituración o desmantelamiento de materiales de desecho es esencial para proteger la salud humana y el medio ambiente de dichas operaciones. Para prestar asistencia a los países no incluidos en el anexo VII con el fin de mejorar la ejecución y la eficacia de sus operaciones de recuperación o reciclado, según proceda, debería apoyarse la transferencia de tecnologías más limpias y ambientalmente inocuas de países incluidos en el anexo VII, incluso mediante la elaboración de instrumentos económicos. La gestión ambientalmente racional de ciertas corrientes de desechos peligrosos destinados a la recuperación puede precisar enfoques o soluciones regionales o subregionales específicos, por ejemplo, en el caso de los pequeños Estados insulares.

8. Examen de las consecuencias derivadas del anexo VII en relación con el logro de los objetivos del Convenio, incluida la reducción al mínimo de la generación y de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos

35. Se han determinado y descrito iniciativas adoptadas por diversas organizaciones destinadas a promover la reducción al mínimo de los desechos y la producción más limpia y a proporcionar orientación al respecto a los gobiernos y a la industria de países incluidos y no incluidos en el anexo VII¹⁰. Se ha puesto interés especial en estudiar en qué medida las actividades generales de reducción al mínimo de los desechos y producción más limpia pueden ampliarse también a la esfera de la reducción al mínimo de los desechos peligrosos. La labor finalizada hasta ahora con respecto a este elemento indica que, a pesar de una década de actividades internacionales encaminadas a promover el concepto de producción más limpia y reducción al mínimo de los desechos, no se han desarrollado actividades suficientes específicamente sobre la reducción al mínimo de los desechos peligrosos. Un obstáculo importante ha sido la incapacidad de transferir los conocimientos, las aptitudes y la experiencia adquiridos en la reducción al mínimo de desechos peligrosos al nivel nacional o local para la aplicación del Convenio de Basilea. Como consecuencia, se dispone de poca información sobre los efectos de las actividades y los resultados de los programas de reducción al mínimo de los desechos en la reducción de los movimientos transfronterizos o en la cantidad de desechos peligrosos generados a nivel mundial.

36. Con la aplicación del Convenio de Basilea, la adopción de acuerdos regionales que controlan los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos y la aplicación de la legislación nacional en este sector, se dispone actualmente de un sistema mundial que es capaz de controlar los movimientos transfronterizos entre países incluidos en el anexo VII, entre países no incluidos en el anexo VII y entre países incluidos y no incluidos en el anexo VII. La entrada en vigor del Convenio de Basilea, así como las decisiones de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos adoptadas a principio de la década de 1990, han tenido el efecto de proporcionar transparencia a las exportaciones e importaciones existentes de desechos peligrosos y, a mediados de la década de 1990, de promover la reducción de los movimientos transfronterizos para eliminación definitiva.

V. Perspectivas futuras

37. Desde mediados de la década de 1990, se ha producido un cambio gradual y significativo en muchos países, tanto en los incluidos como en los no incluidos en el anexo VII consistente en conceder mayor importancia a las oportunidades que brinda el mercado que considere los desechos como un recurso potencial que a la reglamentación. Los progresos realizados en el manejo de desechos y en la creación de nuevos mercados para ciertas corrientes de desechos han conducido a conceder mayor importancia a la necesidad de promover la recuperación o el reciclado como uso eficaz de los recursos naturales y modo de ahorrar energía.

38. En los países en rápido proceso de industrialización existe una creciente demanda de materias primas secundarias para mantener el ritmo de su desarrollo social y económico. En este contexto, existe una gran necesidad de crear una capacidad para la recuperación o el reciclado de ciertos desechos

⁹ EUWID Recycling and Waste Management newsletter RW N°6, 27 March 2001, on recycling, international trade and environment, page 24.

¹⁰ Véase el documento UNEP/CHW/TWG/18/INF/3, sección 9, de 29 de mayo de 2001.

peligrosos y otros desechos. Un creciente número de países no incluidos en el anexo VII se han especializado en la utilización de materias primas secundarias¹¹.

39. La labor realizada en la fase II del análisis ha puesto de manifiesto las siguientes esferas fundamentales que requieren mayor atención:

- a) Manera en que el manejo ambientalmente racional se aplica en la práctica;
- b) Modos de transferir la experiencia adquirida en la reducción al mínimo de los desechos peligrosos y aplicarla en el contexto del Convenio de Basilea;
- c) Elaboración de indicadores para evaluar el riesgo para la salud humana y el medio ambiente asociado con la eliminación, el reciclado o la recuperación de desechos peligrosos;
- d) Elaboración de indicadores de generación de desechos peligrosos;
- e) Elaboración de instrumentos para evaluar la relación costo-beneficio del reciclado de desechos peligrosos en función de los riesgos para la salud y los daños ambientales.

40. Con la adopción en 1999 de la Declaración de Basilea sobre manejo ambientalmente racional, las Partes y sus asociados se han centrado en la siguiente década en la aplicación práctica del Convenio de Basilea, sus enmiendas y protocolo. Esta orientación ha dado como resultado la adopción por la Conferencia de las Partes en su sexta reunión, celebrada en 2002, del Plan Estratégico para la Aplicación del Convenio de Basilea (hasta 2010). El Plan Estratégico reafirma la visión de la Declaración de Basilea de que el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos y otros desechos es accesible a todas las Partes, destacando la reducción al mínimo de dichos desechos y el fortalecimiento de la creación de capacidad. Varias actividades proyectadas o realizadas en el contexto de la aplicación del Plan Estratégico son de pertinencia para algunos de los elementos de la evaluación. Esto es de aplicación principalmente a la promoción de la asistencia técnica para la creación de capacidad y a los enfoques de reducción al mínimo de los desechos peligrosos.

41. Si no se movilizan recursos financieros y de otro tipo previsible e importantes, los países en desarrollo y otros países que necesiten asistencia es poco probable que puedan crear capacidad para el manejo de desechos peligrosos y de otros desechos de modo ambientalmente racional y para reducir al mínimo su generación.

¹¹ Véase la anterior nota a pie de página 7.

Apéndice I

Mandato para la parte II del estudio sobre la aplicación de la decisión IV/8: cuestiones relacionadas con el anexo VII

1. Teniendo presente la creciente preocupación internacional sobre la necesidad de reducir la generación y los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos a un mínimo en concordancia con el manejo ambientalmente racional y eficaz de dichos desechos,
2. Recordando la decisión IV/8, que pide que el Grupo de Trabajo Técnico, en cooperación con el Subgrupo Consultivo de Expertos Jurídicos y Técnicos, proporcione a las Partes un análisis detallado y documentado que ponga de relieve las cuestiones relacionadas con el anexo VII y manifiesta que el anexo VII no debería modificarse hasta que haya entrado en vigor la enmienda contenida en la decisión III/1, y confirma que la labor por realizar es sin perjuicio de cualesquiera decisiones futuras relativas al anexo VII,
3. Haciendo referencia a las amplias deliberaciones que tuvieron lugar en la reunión conjunta del Grupo de Trabajo Técnico con el Subgrupo Consultivo de Expertos Jurídicos y Técnicos que se celebró en Pretoria en 1998, y centradas en el alcance del mandato y del acuerdo sobre los elementos preliminares que hay que considerar en relación con el análisis,
4. Haciendo referencia a las observaciones sobre los elementos del análisis presentadas por las Partes a la secretaría,
5. La finalidad de la parte II del presente análisis es investigar, de modo transparente, objetivo y exhaustivo, las cuestiones relativas a la salud y al medio ambiente, sociales, económicas y de otro tipo relacionadas con el anexo VII que se consideran importantes para la Conferencia de las Partes y ayudar a las Partes a ratificar la enmienda sobre prohibición.

Elementos de la evaluación:

6. Los países sugieren que el análisis de limite a investigar los siguientes elementos en los países incluidos y no incluidos en el anexo VII:
 - a) Examinar las consecuencias del anexo VII en lo que respecta a los aspectos ambientales, económicos y de otro tipo;
 - b) Evaluar el marco institucional y jurídico para la aplicación de la decisión III/1;
 - c) Evaluar las consecuencias del anexo VII para las obligaciones de los países de reducir la generación y movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos; los esfuerzos en curso y los resultados de los programas de reducción al mínimo de desechos; y la infraestructura de manejo de desechos;
 - d) Evaluar los medios de aplicar el párrafo 21 del preámbulo del Convenio de Basilea con el fin de promover la asistencia a los países incluidos en el anexo VII (creación de capacidad) para la gestión racional de desechos peligrosos y otros desechos generados en sus países, incluida la prestación de asistencia financiera y técnica;
 - e) Analizar el riesgo para la salud humana y el medio ambiente asociado con la eliminación, el reciclado o la recuperación de desechos peligrosos y los indicadores que evalúan dichos riesgos;
 - f) Evaluar las medidas que hay que adoptar para aplicar la decisión III/1, incluida su relación con los acuerdos internacionales relativos a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos con el fin de ayudar a las Partes a ratificar la enmienda;
 - g) Evaluar la relación costo-beneficio/eficacia del reciclado de desechos peligrosos en función de los riesgos para la salud y los daños ambientales;
 - h) Examinar las consecuencias del anexo VII en lo que se refiere al logro de los objetivos del Convenio, incluida la reducción al mínimo de la generación y los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.

Apéndice II

Decisiones de la Conferencia de las Partes sobre el anexo VII

III/1. Enmienda al Convenio de Basilea

La Conferencia,

Recordando la petición hecha en la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea para que se prohíba toda exportación de desechos peligrosos de países industrializados a países en desarrollo;

Recordando la decisión II/12 de la Conferencia;

Tomando nota de que:

- la Conferencia ha decidido pedir al Grupo de Trabajo Técnico que continúe su labor sobre las características peligrosas de los desechos sujetos al Convenio de Basilea (decisión III/12);
- el Grupo de Trabajo Técnico ya ha empezado a elaborar las listas de desechos que son peligrosos y de desechos que no están sujetos al Convenio;
- esas listas (publicadas en el documento UNEP/CHW.3/Inf.4) ofrecen ya orientación útil aunque todavía no estén completas o no hayan sido plenamente aceptadas;
- el Grupo de Trabajo Técnico elaborará directrices técnicas para prestar asistencia a las Partes o Estados que, en ejercicio de sus derechos soberanos, decidan concertar acuerdos o arreglos, incluidos los previstos en el artículo 11 sobre el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos;

1. Encarga al Grupo de Trabajo Técnico que asigne la máxima prioridad a la tarea de completar la labor sobre las características de los peligros y la elaboración de listas y directrices técnicas a fin de presentarlas a la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes para su aprobación;

2. Decide que la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes tomará una decisión relativa a una(s) lista(s);

3. Decide aprobar la siguiente enmienda al Convenio:

“Insértese el siguiente nuevo párrafo 7 bis en el preámbulo:

Reconociendo que los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, en particular hacia países en desarrollo, presentan un elevado riesgo de no ser compatibles con el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos que prescribe el Convenio:

Insértese el siguiente nuevo artículo 4 A:

1. Cada Parte incluida en la lista que figura en el anexo VII prohibirá todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos destinados a operaciones previstas en el anexo IV A, hacia Estados no incluidos en la lista que figura en el anexo VII;

2. Cada Parte incluida en la lista que figura en el anexo VII reducirá gradualmente, y prohibirá a partir del 31 de diciembre de 1997, todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos descritos en el inciso a) del apartado i) del párrafo 1 del Convenio destinados a operaciones previstas en el anexo IV B, hacia Estados no incluidos en la lista que figura en el anexo VII. Sólo se prohibirán esos movimientos transfronterizos de desechos si presentan características peligrosas con arreglo a las disposiciones del Convenio.

Anexo VII

Partes y otros Estados que son miembros de la OCDE, la CE, Liechtenstein.”

IV/8. Decisión relativa al anexo VIILa Conferencia,

Afirmando los objetivos expuestos en la decisión III/1,

Tomando nota de que la enmienda contenida en la decisión III/1 aún no ha entrado en vigor, y tomando por ello también nota de la decisión IV/7 de esta Conferencia, en la que se insta a las Partes a ratificar esa enmienda con carácter prioritario,

Tomando nota además de la grave preocupación expresada por los países árabes y otros países por lo que respecta a la introducción de cambios en el anexo VII,

Reafirmando la importancia que revisten la amplia ratificación y la entrada en vigor de la enmienda contenida en la decisión III/1 y reconociendo las dificultades que entraña la modificación del anexo VII antes de la entrada en vigor de esa enmienda,

Tomando nota además de las propuestas para inclusión en el anexo VII formuladas por las Partes,

1. Decide no modificar el anexo VII hasta que haya entrado en vigor la enmienda contenida en la decisión III/1;
2. Decide además estudiar las cuestiones relacionadas con el anexo VII, y pide al Grupo de Trabajo Técnico que, en cooperación con el Subgrupo de expertos jurídicos y técnicos, proporcione a las Partes un análisis detallado y documentado que ponga de relieve las cuestiones relacionadas con el anexo VII;
3. Pide a esos dos grupos que informen a la Conferencia de las Partes en su quinta reunión;
4. Confirma que la labor por realizar es sin perjuicio de cualesquiera decisiones futuras relativas al anexo VII.

V/4. Informe sobre la aplicación de la decisión IV/8
(decisión relativa al anexo VII)

La Conferencia,

1. Acoge con beneplácito el informe preparado por la secretaria sobre la fase I del análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII;

2. Invita a las Partes, a los países que no son Parte y a las organizaciones no gubernamentales a que presenten a la secretaría observaciones adicionales sobre el informe que puedan mejorar su contenido;

3. Acepta los elementos de la evaluación para la segunda fase del análisis, en su forma aprobada por la reunión conjunta del Grupo de Trabajo Técnico y el Subgrupo Consultivo de Expertos Jurídicos y Técnicos en su reunión conjunta celebrada en abril de 1999;

4. Pide a la secretaría que continúe su labor sobre la segunda fase del análisis y prepare un informe sobre la aplicación de los elementos de evaluación para su examen por el Grupo de Trabajo Técnico y el Subgrupo Consultivo de Expertos Jurídicos y Técnicos;

5. Pide también al Grupo de Trabajo Técnico y al Grupo de Trabajo Jurídico que continúen supervisando los progresos del análisis y proporcione orientación a la secretaría, cuando sea necesario, y que informe a la sexta reunión de la Conferencia de las Partes al respecto.

VI/34. Análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII

La Conferencia de las Partes,

Recordando que la finalidad del análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII es examinar de manera transparente, objetiva y pormenorizada las cuestiones de salud, ambientales, sociales, económicas y de otra índole que se consideran importantes para la Conferencia de las Partes, y prestar asistencia a las Partes para que ratifiquen la Enmienda de Prohibición contenida en la decisión III/1 - Enmienda del Convenio de Basilea,

Recordando también que la segunda fase del análisis deberá limitarse a investigar los ocho elementos ya determinados,

Recordando además su decisión V/4 - Informe sobre la aplicación de la decisión IV/8 (decisión relativa al anexo VII),

Reafirmando su decisión de mantener el anexo VII sin cambios hasta que entre en vigor la enmienda contenida en la decisión III/1,

Tomando nota de que se han realizado algunos adelantos en el análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII,

Decidida a finalizar el análisis a más tardar para la celebración de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes,

1. Pide a la secretaría que complete la segunda fase del análisis a tiempo para la séptima reunión de la Conferencia de las Partes y que, al realizar esa labor, aproveche al máximo la información existente y recabe toda otra información que considere necesaria;

2. Pide también a la secretaría que presente el primer borrador del análisis a una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2003 y que presente la versión definitiva del análisis a tiempo para que pueda ser examinada en la última reunión de ese órgano antes de presentarla para que la Conferencia de las Partes adopte una decisión final en su séptima reunión;

3. Pide además a la secretaría que apoye a las Partes, previa solicitud, para que ratifiquen la Enmienda de Prohibición contenida en la decisión III/1;

4. Invita a las Partes y a otras entidades a que proporcionen a la secretaría materiales o documentación pertinentes que ayuden a ésta en su labor;

5. Pide al Grupo de Trabajo de composición abierta que siga supervisando la evolución de la labor y que proporcione orientación a la secretaría para velar por que se finalice a tiempo;

6. Pide también al Grupo de Trabajo de composición abierta que presente a la Conferencia de las Partes, en su séptima reunión, un informe definitivo sobre el análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII.

Apéndice III

Fuentes Utilizadas

Se han utilizado los siguientes documento para preparar el proyecto de informe:

- Documento UNEP/CHW/TWG/18/INF/3: Report by the company Environmental Resources Management (ERM) on part II of the study on implementation of decision IV/8 – Annex VII issues, including a report by a consultant on legal and institutional aspects, 29 May 2001
- Documento UNEP/CHW.5/INF/4: Aplicación de la decisión IV/8 (decisión relativa al anexo VII) – Resultados de la parte I del análisis, 15 de noviembre de 1999
- Documento UNEP/CHW.6/34: Análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII, incluido el resumen del análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII, 30 de agosto de 2002
- Documento UNEP/CHW/TWG/LWG/1/8 y UNEP/CHW/TWG/LWG/2/9, informes de la primera y segunda reuniones conjuntas del Grupo de Trabajo Técnico y del Grupo de Trabajo Jurídico, respectivamente, 12 de febrero de 2002 y 4 de julio de 2002

Parte II. Compilación de las observaciones presentadas por escrito a la secretaría con antelación al tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo de composición abierta

Australia

January 2004

In Decision OEWG-II/6, the Open-ended Working Group, considering the first draft of the analysis of issues related to Annex VII prepared by the Secretariat, invites Parties and others to submit to the Secretariat, by 31 January 2004, any further technical or specific comments or information taking into account, as appropriate, the points contained in Annex III to the report of the second session of the Open-ended Working Group that would not reopen discussion or raise new issues.

Australia, taking into account the point contained in paragraph 12 of Annex III to the report of the second session of the Open-ended Working Group, wishes to submit the specific comments set out below. Paragraph 12 states: "The issue of the existing structure of Annex VII as a potential obstacle to the ratification of the Ban Amendment was raised by some Parties."

Australia has consistently argued that the distinction between Annex VII and non-Annex VII countries will remain problematic until environmental criteria are developed under the Basel Convention to distinguish between the two groups of countries.

In this context, we note that paragraph 17 of the first draft of the analysis of issues related to Annex VII prepared by the Secretariat, document UNEP/CHW/OEWG/2/7, states:

17. "Marked differences are noted among non-Annex VII countries in terms of their capacity to manage hazardous wastes. Non-Annex VII countries include some countries with a capability for the environmentally sound management of hazardous and other wastes. In this case, a capacity for environmentally sound management may often be specific to particular hazardous waste streams. There are countries with some of the basic infrastructure needed to support hazardous wastes management, including the necessary legal and institutional framework, but which still lack the skilled personnel and financial resources to ensure environmentally sound management. Another group of countries have invested only limited resources in infrastructure for hazardous waste management, even though they are in the process of intensive industrial development. Others could be classified as least developed countries with minimal infrastructure. Although there is a less marked difference in waste management performance among the Annex VII countries, a number of these countries, in particular those with economies in transition that are members of OECD, are still developing or reinforcing their waste management infrastructure and recovery and recycling capacity. It should be noted that the environmentally sound management capacity of some Annex VII countries may also be confined to certain specific hazardous waste streams."

We do not regard the issues described above as problematic so far as the capacities of Annex VII countries are concerned. If an Annex VII country lacks the capacity to manage hazardous wastes in an environmentally sound manner, other Parties must not allow hazardous wastes to be exported to that country, in accordance with paragraphs 8 and 10 of Article 4 of the Convention.

Paragraph 8 of Article 4 states: "Each Party shall require that hazardous wastes or other wastes, to be exported, are managed in an environmentally sound manner in the State of import or elsewhere".

Paragraph 10 of Article 4 states: "The obligation under this Convention of States in which hazardous wastes and other wastes are generated to require that those wastes are managed in an environmentally sound manner may not under any circumstances be transferred to the States of import or transit."

The issues described in paragraph 4 above are problematic, however, if a non-Annex VII country has a capacity for the environmentally sound management of hazardous and other wastes. An Annex VII Party that has ratified the ban amendment must not allow hazardous wastes to be exported to a non-Annex VII country, but if the importing country has the relevant capacity, such a prohibition would not be based on the lack of capacity to manage hazardous wastes in an environmentally sound manner. It would be based only on the fact that the importing country in question was not listed in Annex VII.

This would raise questions about how and why countries were listed in Annex VII. It should be noted that the Parties have done nothing, in the more than eight years since Decision III/1 adopted Annex VII on 22 September 1995, to develop a process to ensure that listing in Annex VII is based on considerations that are demonstrably linked to environmental competency.

Despite this lack of a Basel Convention process, the membership of Annex VII has expanded and is continuing to do so. In 1995, Annex VII contained 26 member countries of the OECD: today it contains 30. This year it will also contain six member states of the European Community who are not members of the OECD. In just over eight years, the number of countries listed in Annex VII will have increased from 27 to 37 without any oversight by the Parties to the Basel Convention.

It should also be noted that the Parties have been able to develop a capacity to oversight amendments to Annexes VIII and IX. In February 1998, Decision IV/9 incorporated List A, identifying wastes characterized as hazardous and List B, identifying non-hazardous wastes, as Annex VIII and Annex IX respectively. Less than two years later, in December 1999, Decision V/24 adopted a procedure for reviewing and adjusting these lists of wastes. Less than five years later, in December 2002, Decision VI/35 adjusted the lists for the first time.

The fact that good progress has been made in developing a procedure for adjusting Annexes VIII and IX raises further questions as to why no progress has been made with Annex VII. Of course, Decision IV/8 decided to leave Annex VII unchanged until the amendment contained in Decision III/1 entered into force, but this does not preclude the development of a procedure for amending Annex VII, even if such a procedure is not yet in use.

Canada

Ottawa, Ontario
K1A 0H3
January 22, 2004

Ms. Sachiko Kuwabara-Yamamoto
Executive Secretary
Basel Convention Secretariat
15, Chemin des Anemones
1219 Chatelaine (Geneva)
Switzerland

RE: Canadian Input on the Analysis of Issues Related to Annex VII Paper prepared by the Basel Secretariat:

Dear Ms. Kuwabara-Yamamoto:

At OEWG 2 held in Geneva last October countries were asked to submit comments on the Basel secretariats paper "Analysis of Issues Related to Annex VII". Canada feels that the secretariat paper presented at OEWG 2 appears to be a balanced and a representative view of positions taken by various parties on the Annex VII issue. It is for this reason Canada's comments, at this time, reflect minor changes focusing primarily on attachments to the paper rather than substantive changes within the paper.

In order to keep the number of documents referenced within reasonable limits, Canada suggests UN and OECD documents only be used. Canada believes that referencing the following documents would be useful in assisting countries in answering questions related to the Ban amendment:

- Basel Convention Guidelines (May want to be selective on the guidelines identified; specifically those related to ESM)
- Implementation of Decision IV/8, May 2001, Environmental Resources Management
- Institutional and Legal Framework for the Implementation of Decision III/I, 29 May 2001, Kummer EcoConsult
- Capacity Building Needs of Developing Countries, June 2003, Center for Environmental Technologies
- Trade Measures in Multilateral Environmental Agreements, October 1999, OECD Joint Session of Trade and Environment
- Also retain the UNCTAD; Lead Acid Battery Case Study and Zinc Dross. Case Study already referenced in text

Please do not hesitate to contact me should you require further information.

Yours sincerely,

France Jacovella, P.Eng.
Director, Transboundary Movement Branch
Environment Canada
Tel: (819) 956-5263 / Fax: (819) 997-3068

E-mail: france.jacovella@ec.gc.ca

cc. Pierre Portas, Senior Programme Officer / Technical. Basel Convention Secretariat

Egypt

1. General comments

The main purpose of the analysis is to assist countries to ratify and implement the Ban Amendment. Although the Ban Amendment has yet to become a legally binding instrument, it is morally binding and has successfully prevented large scale dumping of hazardous wastes in developing countries. The Ban Amendment has played an essential role in protecting human health and the environment against the adverse effects that may result from such wastes. It represents a significant achievement for the environment.

Priority should be attached to attaining the necessary ratifications that would expedite its entry into force.

2. Examination of the environmental, economical and other implications of annex VII, paragraph 12

It should be made clear that by preventing the transfer of hazardous wastes to developing countries, the Ban Amendment constitutes a major step towards achieving environmentally sound management.

3. Evaluation of the institutional and legal framework for the implementation of decision III/1 – paragraph 16

Paragraph 16 needs to be revised and corrected. The lack of domestic legislation in developing countries (non-Annex VII countries) does not constitute a legal obstacle to the ratification of the Ban Amendment.

The Ban Amendment places requirements on developed countries (annex VII countries) to ensure that hazardous wastes are not exported to non-annex VII countries. It is assumed that developed countries have the capacities to develop the institutional and legal infrastructure to ratify and implement the Ban Amendment.

4. Evaluation of capacity building assistance to non-Annex VII countries – paragraph 23

The Basel Convention Regional Centres should play a principal role in facilitating the ratification of the Ban Amendment. Workshops and seminars should be organized to improve understanding of the Ban Amendment and raise awareness of the importance of its ratification.

5. Evaluation of the steps taken to implement decision III/1 – paragraph 30

With regard to the relationship between Annex VII and agreements under the World Trade Organization (WTO), it is important to note that free trade does not apply to hazardous wastes.

6. Future Prospects – paragraph 37

Paragraph 37 needs revision and clarification. It does not give consideration to the environmental and health effects of recycling hazardous wastes.

Israel



STATE OF ISRAEL

Ministry of the Environment

ISRAEL: Comments on issues related to the analysis of Annex VII – Phase II, Presented to the Secretariat of the Basel Convention according to Decision OEWG-II/6

January 2004

Israel wishes to express its appreciation for the effort and the work done by the Secretariat in the studying and analyzing various aspects and problems emerging from Annex VII, and to make the following comments and observations in accordance with Decision OEWG-II/6.

I. Examination of the environmental, economical and other implications of Annex VII.

1. Paragraph 4 of Annex III to the report of the second session of the Open-Ended Working Group, states: *"In order to provide an accurate picture of the situation, it should be noted that many Parties do not encounter major difficulties with regard to the concept of environmentally sound management."* (henceforth - **ESM**).

2. One of the major difficulties mentioned in phase II of the Annex VII study and discussed in the meetings of the Parties, is the absence of a clear definition of the concept of ESM.

In order to overcome this absence, some criteria should be determined, in addition to those that already exist in the Convention (mainly in Chapter IV), phase II of the analysis of issues related to Annex VII and in the recent publication on ESM published by the Secretariat, including the following:

- (1) The availability of legal and administrative tools, which will enable a Party to achieve ESM of hazardous wastes are:
 - a. Appropriate legislative infrastructure: laws, regulations, directives and guidelines;
 - b. Proper control and implementation tools, including surveillance, monitoring and reporting activities;
 - c. Elaboration of emergency response capacity to treat chemical accidents.
- (2) An appropriate level of industrialization and technical development, in particular of industrial resource recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses.
- (3) The capacity to handle hazardous wastes in an environmentally sound manner, measured by its -
 - a. Technical capacity for recovery and recycling of secondary raw materials;
 - b. Ability to support a viable secondary raw material recovery and recycling industry;
 - c. Existing capacities for environmentally sound treatment and disposal of hazardous wastes.
- (4) The potential contribution to the development of cleaner production technologies and enhancement of sustainable development on the national, as well as, on the regional and global levels.

In addition, a Party that has ESM proven capacities, as specified, should be required to refrain from exporting hazardous wastes and other wastes to countries lacking appropriate treatment and management capacities.

II. Evaluation of the steps taken to implement decision III/1

3. Following are comments relating to Paragraph 12 of Annex III to the report of the second session of the Open-Ended Working Group that states: *"The issue of the existing structure of Annex VII as a potential obstacle to the ratification of the Ban Amendment was raised by some Parties"*.

4. The division between Annex VII countries and non-Annex VII countries does not reflect the level of professional, technological and institutional environmental treatment of hazardous wastes in the different countries, as elaborated in Paragraph 17 of the first draft of the analysis of issues related to Annex VII prepared by the Secretariat (Document UNEP/CHW/OEWG/2/7), that states:

"Marked differences are noted among non-Annex VII countries in terms of their capacity to manage hazardous wastes. Non-Annex VII countries include some countries with a capacity for the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes. In this case, a capacity for the environmentally sound management may often be specific to particular hazardous waste streams. . . ."

Although there is a less marked difference in waste management performance among the Annex VII countries, a number of these countries, in particular those with economies in transition that are members of OECD, are still developing, or reinforcing their waste management infrastructure and recovery and recycling capacity. It should be noted that the environmentally sound management capacity of some Annex VII countries may also be confined to certain specific hazardous waste streams."

It is our understanding that the analysis emphasizes the importance of making a specific assessment of environmental capacities of each individual Party in relation to its inclusion in annex VII.

5. An inevitable conclusion from the aforementioned is that the export of hazardous wastes to Annex VII countries that lack the infrastructure and capacity to manage them in an environmentally sound manner, appears to be in contradiction to the objectives of the Basel Convention as expressed in Article 4 Paragraphs 8 and 10 that state: Paragraph 8- *"Each Party shall require that hazardous wastes or other wastes, to be exported, are managed in an environmentally sound manner in the State of import or elsewhere."* ;

Paragraph 10- *"The obligation under this Convention of States in which hazardous wastes and other wastes are generated to require that those wastes are managed in an environmentally sound manner may not under any circumstances be transferred to the States of import or transit."*

The above-demonstrated inconsistencies raise legal and constitutional issues that should be considered and solved.

6. As stated in Article 4 Paragraph 9: *"Parties shall take the appropriate measures to ensure that the transboundary movement of hazardous wastes and other wastes only be allowed if: ... (b) The wastes in question are required as raw material or recovery industries in the States of import;"*

It seems that due to the present structure of Annex VII, it is not possible to meet this objective of the Convention.

7. It should also be noted, that since the adoption of decision IV/8 - *"to leave Annex VII unchanged until the amendment contained in Decision III/1 enters into force,"* some countries, among them those with economies in transition, have joined the OECD and other countries are expected to join the EU in the near future. These countries therefore will automatically be included in Annex VII.

In addition to the legal implications of this situation *vis a vis* Decision IV/8, it is also important not to overlook its environmental implications.

8. Concerning questions raised during the second session of the Open-Ended Working Group in regard to *"The relationship of Annex VII with international trade rules and WTO was raised as an important issue"*, we support the expressed notion *"that it would be useful for the secretariat to prepare a text containing factual information."*

Within this context the following matters might be considered *inter alia*:

- a. Are wastes intended for recycling or recovery treatment defined as a "product" according to WTO rules;
- b. What are the impacts on international trade caused by the present structure of Annex VII, and especially regarding hazardous waste recycling and recovery industries in non-Annex VII countries, compared to similar industries located in Annex VII countries.

It is worthwhile noting that these matters are referred to in Chapters I, XI, XII and XX of the GATT agreements and might be considered.

We expect that these comments will be considered and integrated in the future study on issues related to Annex VII.

Japan

February 2004

Japan appreciates the secretariat's work in preparing the draft of the analysis contained in UNEP/CHW/OEWG/2/7. Decision OEWG II/6 invites the Parties to submit comments on the draft. Japan considers that the Analysis should be objective and neutral, and should address the Parties' concerns adequately, in order to provide the Parties with enough information to consider the Annex VII issue, a necessary step towards the ratification of the Ban Amendment. From this point of view, Japan wishes to submit the following specific comments.

1. Japan considers that the cases in paragraph 21, which are gathered from existing official publications, are useful in understanding the actual implications of Annex VII. Japan welcomes the possible addition of cases as long as they are also from existing official publications. Adding cases from other sources should be avoided, because otherwise there might be numerous cases ranging in quality which would spoil the balance and quality of the report.
2. Regarding the issue of the relationship with agreements under the WTO, taking into account the discussion at OEWG2, Japan suggests that the following paragraph of factual information be added after paragraph 32.

32 bis. Regarding the relationship with agreements under the WTO, in the past meetings of the Basel Convention, some parties, in view of the importance of a mutually supportive relationship between trade and the environment, supported the listing of parties in Annex VII based on the parties' waste-management capacity rather than OECD membership. There have also been some studies published that analyze the issues of this relationship.¹ Under the WTO, the Committee of Trade and the Environment (CTE) has been undertaking negotiations on "the relationship between existing WTO rules and specific trade obligations (STOs) set out in multilateral environmental agreements (MEAs)" according to the Doha Ministerial Declaration adopted in November 2001. To date, its discussions have been focused on developing a common understanding of the mandate, and the results of the negotiations have yet to be seen.

¹ For example: Robert Housman, et al., *The Use of Trade Measures in Select Multilateral Environmental Agreements*, UNEP (Environment and Trade 10), 1995.

Basel Action Network (BAN)

6 February 2004

General Comments

The mandate of the terms of reference for phase II of the Annex VII analysis states that “the purpose of this analysis is to explore, in a transparent, objective and comprehensive manner, health, environmental, social, economic and other issues related to Annex VII that are considered important to the Conference of Parties and to assist Parties to ratify the ban amendment.”

The requirements are unequivocal that the exploration of the issues must be transparent, objective and comprehensive, and be included with a view to assist Parties in ratifying the Basel Ban Amendment. There are certain points in the present document that we believe are likely to fail the test of meeting fair standards of objectivity and comprehensiveness and moreover are, on balance, not aimed to assist Parties to ratify the ban amendment.

One crucial point that has been bypassed often is the economic costs on the environment and human health - the price tag for pollution. BAN has consistently advocated that this type of study or analysis be undertaken in order to fully comprehend the repercussions of waste trade and its impact on the local environment and community. This is the other side of the economic coin of the trade in hazardous wastes that is consistently unaccounted for. The terms of reference bears out the need for this type of analysis, and yet this has never been done.

There are also areas of flagrant imbalance and non-objectivity in the analysis. One striking example is right at the very beginning, when the list of issues regarding implementation of the ban amendment all contain negatives and no positives. This imbalanced portrayal belies the fact that in 2003, 8 ratifications occurred for the Ban Amendment and one has already occurred in January of 2004. The amendment has been on a steady pace of achieving more than 5 ratifications per year and recently this average is seeing a clear increase. Compared with a similar instrument like the London Protocol (receiving 2.66 ratifications per year, thus far) that bans the dumping of industrial wastes at sea, the Basel Ban Amendment has received excellent support. Presently there are now 44 total ratifications in total. Surely, these 44 nations see something positive or have experienced something positive in ratifying the Ban Amendment. Have these experiences been translated or communicated into the analysis? Wouldn't the experiences of those that have ratified the ban be vital with respect to the consideration of assisting parties to ratify the ban? So far the paper is lacking in this regard, and as such reveals a certain imbalance and lack of objectivity in contradiction to its mandate.

The comments that follow are consistent with the mandate to not consider new issues or attempt to raise new issues not dealt with already in the current analysis. The comments below are given to help steer the present analysis closer to what the terms of reference have originally called for in terms of balance, objectivity and with a view to assisting the Parties to Ratify the Ban Amendment.

Specific Comments

III. A.

There is a need to mention the positive experiences of Parties who have ratified the Ban Amendment in this survey or summary of issues raised by Parties. Recently, the Ban has seen an increase in ratifications with 9 in the last 13 months. The Parties who have ratified the Amendment have something valuable to contribute in the analysis, as to why they ratified, and the noted benefits of doing so. Thus, it is imperative to include such positive issues in order to arrive at a balanced and well-rounded analysis of the Annex VII issue. As this new text must be provided for by those countries that have ratified the ban, we would request that the Parties that have already ratified the ban be asked to submit some observations in this regard before the text is finalized.

IV. B. 1.

Para. 13. This paragraph is incorrect in that some of the noted “principles” are in fact obligations of the Convention. The “proximity principle” which does not in fact exist in the Convention is therefore not really of significant standing in the Basel Convention. Finally, despite the fact that the self-sufficiency principle and least transboundary movement principles are actually obligations of the Convention, it is incorrect to state so vaguely: “recognizing that the application of those principles will vary from country to country.” Finally, in stating unequivocally that: “in some cases, however environmentally sound and efficient management of certain hazardous wastes may be achieved at specialized facilities located in another country”, the statement in a way flies in the face of the obligations of the Convention, and likely the Ban Amendment. Further, there is no recognition of Annex VII itself here which the analysis is supposed to be about. Annex VII was created to respect the special needs of developing countries as well as the special responsibilities of developed countries. Therefore, we strongly suggest that the text should be dramatically altered to read as follows:

The Convention calls on all Parties to minimize the transboundary movement of hazardous wastes and to strive for national self-sufficiency in hazardous waste management. Thus there must be an effort to build capacity for such environmentally sound management in each country in order to reduce transboundary movements. Developed countries have a special role in this regard vis a vis, developing countries.

Para. 14. The first sentence of paragraph 14 makes an assertion of fact, which we believe to be true, yet it is not supported by any citation of evidence or sources proving the factual claim. The study mentioned in the second sentence only examines zinc and lead, and would thus, fail to qualify as supportive of the previous assertion in the paragraph.

The statement in subparagraph (a) is fine, however, it discusses a percentage of the total zinc wastes traded that are in fact hazardous under the Convention and this bears no relation to subparagraph (b) which starts a discussion about competitiveness. In fact, subparagraph (b) doesn’t assert anything other than the fact that something “could” occur. The fact that something “could” occur in the future, is hardly relevant here, as the list of things that “could” occur, should they be cited in full would be a long list indeed.

For the foregoing reasons, we suggest that paragraph 14 be deleted as being unhelpful in fulfilling the mandate of the study.

IV. B. 2.

Para. 16. There is a significant logical flaw in the conclusion arrived at by the study as stated in the first sentence in this paragraph, as it misinterprets the requirements under the Basel Convention and Decision III/1. BAN had commented on this fact earlier in our comments on the consultant’s incorrect conclusion.

While the Convention imposes an obligation on all Parties, Decision III/1, on the contrary, only calls for implementation on the part of Annex VII countries, namely those countries that are member group of mostly industrialized nations called the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the European Union and Liechtenstein. Thus, it is incorrect to assert that the countries that must implement the ban have inadequate capacity or resources to do so. Rather, the ban was designed precisely to place responsibility on countries that were certain to have all of the infrastructure and economic development to implement the ban. The thrust of the entire paragraph -- that OECD countries lack the infrastructure, resources or legislative capacity to implement the ban, which only they must implement is an utter falsehood. Moreover, the study with its faulty conclusion fails in fulfilling the terms of reference requirement of assisting parties in ratifying the Ban Amendment, as it regrettably discourages any ratification from occurring. For these reasons the paragraph should be deleted.

IV. B. 3.

Para. 17. Again this section is a discussion of the implementation of decision III/1 which only must be implemented by Annex VII countries. Therefore, we cannot understand the relevance of statements about the lack of capacity of non-Annex VII countries. As there is little revealed in this paragraph regarding OECD countries, we suggest deleting this paragraph. At the very least all references to non-OECD countries should be deleted as the paragraph is meant to deal with implementing Decision III/1.

Para. 18. The discussion in the final three sentences refers to a matrix and a baseline. As this analysis is not meant to be a summary of other papers but a stand alone document, we would suggest deleting the last three sentences of this paragraph.

Para. 19. Oddly there is no discussion here about the increase or decrease of hazardous waste flows from Annex VII countries to non-Annex VII countries as plotted over time. This is the most relevant data with respect to the ban as it is not designed to minimize other waste flows, only those from Annex VII to non-Annex VII. This data can also help Parties revisit the significance of the ban which can ultimately assist them in ratifying the Ban Amendment. All others are irrelevant to the issues concerning the ban and Annex VII.

Para. 21. The cautionary statement in para. 20 requires that the two cases cited in this paragraph be sufficiently described to highlight the particular nature of the cases to the country in which they were derived from. Having had the opportunity to look at the actual paper cited for the first case, BAN noted some objective details missing from the case summary. We suggest the following adjustments in order to more accurately reflect the paper in question:

One non-Annex VII country developed a lead recovery industry in the late 1980s due to the huge capital outlay needed to mine its lead deposits. In spite of an admitted lack of a national effort to collect domestic used batteries, the country made a determination that the national supply of lead through secondary sources was insufficient to ensure a viable and efficient use of the lead smelters. As a consequence, the country imported lead-acid batteries principally from a single source in an Annex VII country until 1994. As the lead recycling industry developed in this non-Annex VII country, lead poisoning in workers and the community around the recycling plants became commonplace. In fact, the rise in lead poisoning incidents and the hazards of such recycling plants prompted some regions in the same non-Annex VII country to shut down all used battery processing factories.

In the process of amending the environmental law, the legislative assembly of that country requested the banning of hazardous waste imports, with exception of used batteries, up to the year 2002. The exemption was based on the commonly used argument by the battery recycling industry that because the supply from domestic sources was insufficient to reach an economic production level, used batteries were needed to be imported until the local supply could satisfy the economic needs. Yet this argument was made in the absence of an adequate domestic collection system for locally generated waste batteries.

Meanwhile, the Annex VII country (principal source of used batteries) stopped its export of used lead-acid batteries, in line with decision III/1. Since 1998, the used batteries are imported principally from non-Annex VII countries. In the meantime, progress in encouraging and improving the collection of used batteries at the local level remain slow. In addition, small-scale recyclers which do meet the country's environmental and health requirements are still operating illegally.

BAN has not been able to find the source of the second case noted here. But given the experience in reading the case above, and comparing it to the summary, we believe it would be prudent to allow the Parties to actually review this case. In order to arrive at a more transparent and objective summary of the case, BAN suggests that subparagraph (b) be placed in square brackets and remain open for modifications until the source for the case has been given to Parties for review, and for the Parties to weigh in with comments on whether the case has been adequately summarized and whether its argumentation is sound.

IV. B. 5.

Para. 27. This paragraph largely claims that there is a lack of data regarding the health impacts from hazardous waste management operations. This is certainly not the case. There are numerous studies in existence. In fact several studies even exist which document health effects from the importation and subsequent handling and management of toxic waste. Some that come to mind are studies conducted in Cambodia following the importation of mercury-laden waste from Taiwan which included several deaths as a result. Likewise, imported mercury wastes caused the death of 2 workers at the Thor Chemical plant in South Africa. Studies of shipbreaking workers that have been done also, evaluate health impacts and the prospective deaths from cancer from asbestos alone. It is vital that the Secretariat cite this existing and published information. There is no relevance here with respect to illegal traffic and thus this sentence should be removed, particularly as it seems to imply that there are no health impacts from the legal traffic of hazardous wastes. Finally, the reference to an Annex III list of “wastes” is incorrect, as Annex III is a list of hazardous characteristics and not wastes.

IV B. 6.

Para. 29. Here it must be noted that ratification and implementation are two different things. In other words it is clear that while all Parties are urged to ratify the Convention, only the Annex VII countries are to implement it. The group of countries that were among the first to implement the Basel Ban was the European Union member states. Therefore, we propose that the EU experience and steps for implementation be reflected here. The EU experience is a well-documented, the existence of which, belies the assertion here that the information does not exist.

IV. B. 7.

Para. 32. Here the term “sham” recycling needs to be augmented. Sham recycling refers to recycling that is not really recycling at all. What is more often the case is “dirty” recycling – highly polluting operations. Thus we would recommend the formulation: “sham and dirty recycling”. The final sentence in this paragraph is extremely misleading. The implication here is that only those that freely trade in waste might get access to newer and cleaner technologies. This is patently false. Everyone in the world has access to clean technologies if they are made available. There are no trade restrictions of any kind on clean technologies! This latter sentence needs to be scrapped.

Para. 33. This paragraph is extremely imbalanced and not all objective. Suddenly the text is calling wastes “secondary raw materials”. These are “wastes” and in fact are hazardous or other wastes in the Basel context which are known to cause environmental harm when disposed or recycled. Nothing in this paragraph suggest why scrap and wastes migrate from Annex VII to non-Annex VII countries. This is quite amazing as it is a well-known phenomenon which spawned the Basel Convention itself. Hazardous waste migrates to take advantage of cheaper recycling labor, lack of environmental and occupational protections etc. found in developing countries or weaker economies. It is small wonder that the flows of wastes from Annex VII to non-Annex VII countries and not the other way around. The Basel Convention calls for self-sufficiency in waste management. This paragraph seems to have forgotten this obligation completely. Further, this paragraph implies that all that is necessary to allow the export of hazardous wastes from Annex VII countries to non-Annex VII countries is enhanced technology in the non-Annex VII country. However, regardless of technology levels, pollution is still transferred. What remains unanswered by technological “solutions” are the incentives to prevent waste in the first place, the fact that technology alone cannot guarantee levels of environmental and human health protection, and finally, the justice issue of allowing weaker economies to receive a disproportionate burden of the world’s waste simply because they are relatively poor. This paragraph must be deleted.

New Para. 34 The contents in item 7 do not properly bear or coincide with the terms of reference it was intended to fulfill. The heading in Item 7 refers to an evaluation of the cost-benefit and effectiveness of hazardous waste recycling versus health risks and environmental damage, yet no mention is made of existing efforts in the international community to determine the environmental costs of the emissions of toxic substances. One such study was commissioned by the Nordic Research Council on the economic valuation of emissions of several toxic substances. In this regard, we suggest that the following paragraphs be inserted as a new paragraph 34, under item 7:

There have been efforts in placing negative economic values to the adverse environmental effects of toxic substances. One such effort was commissioned by one Annex VII country. It was designed as an aid to policy-makers in arriving at a rational decision on how to prioritize measures in curbing pollution from particular hazardous substances.

In determining the economic value for a particular substance, the study compiled recent weighting/ranking methodologies on the adverse impact of several substances, particularly their physical effects. The monetary values were based on surveys conducted by several Annex VII countries. From there the study developed a best, low, and high estimate of the environmental cost of a particular substance. An anchor substance was chosen in order to come up with an evaluation of the other substances. In this case, the study chose lead as the anchor substance due to its known effects, and for the numerous studies that have been carried out to assess the damage caused by its emissions.

Some of the resulting values of the study are:

<i>Substance</i>	<i>Best estimate*</i>	<i>Low estimate*</i>	<i>High estimate*</i>
<i>Dioxin</i>	<i>2.2E+06</i>	<i>8.4E+05</i>	<i>6.0E+06</i>
<i>TBT</i>	<i>261</i>	<i>98</i>	<i>697</i>
<i>Chromium 6+</i>	<i>163</i>	<i>61</i>	<i>434</i>
<i>Mercury</i>	<i>111</i>	<i>41</i>	<i>296</i>
<i>PCB</i>	<i>96</i>	<i>36</i>	<i>256</i>
<i>Cadmium</i>	<i>32</i>	<i>12</i>	<i>87</i>
<i>Lead</i>	<i>6.1</i>	<i>2.3</i>	<i>16</i>

** Prices are in Norwegian Kroner per gram.*

Thus, if a 25,000 metric ton capacity/year lead-acid battery recycling plant operating in a non-Annex VII country, importing lead acid batteries has a 98% lead recovery rate, with 2% fugitive emissions, that means 500 tons of lead per year is being emitted in the vicinity of the plant. Applying the study values, based on the low estimate of NOK 2.3 per gram of lead emission, the low estimate would equate to an environmental cost of the 500 tons of lead emission as NOK 1,150,000,000 (US\$166,064,982) per year to the country where this particular plant is located. Under the best estimate the environmental cost would be pegged at NOK 3,050,000,000 (US\$440,433,213) per year.

The values presented under this study and others like it can greatly aid Parties in their analysis of the economic benefits and cost of hazardous substances. Too often these costs resulting from emissions and residues in even state of the art recycling operations are not calculated, and result in cost externalities and dramatic economic inefficiencies.

V. 8.

The title of this section and the content of paragraphs 34 and 35 have little to do with one another. What is needed here is an examination of how the Ban Amendment impacts waste minimization. We maintain that there is a strong correlation. Therefore we suggest the following paragraph.

New Paragraph for Section 8:

The ban, by closing off cheap and dirty options for waste management can force cost internalizations which in turn drive "green design" and thus hazardous waste minimization. One such example is found in the European Union which after ratifying and implementing the Basel Ban in 1997, was thereafter forbidden from exporting electronic wastes to weaker

economies. As a result, the pressure to design for less toxics and recycling and enhanced collection became far more acute in Europe, in comparison to North America where a free trade in electronic wastes to non-Annex VII countries persists to this day. It is largely due to the closing-off of the export "escape hatch" that has pressed Europe into more rapidly adopting legislation to enhance European recycling of electronic waste and to phase-out toxic inputs to electronic products to ensure that such domestic recycling has less economic and environmental impacts within Europe.

VI.

Paras. 36 and 37. The pronouncements made in these paragraphs were more accurate for the period from the mid to the late 1990's than with the realities of the new decade. For the most part the global privatization trend has dissipated, and in its wake lies the ruins of the failure of deregulation in crucial industries. What paragraph 36 misses out on is that with the new century there have been increasing efforts globally to ratchet up corporate responsibility for their products through legislation. At times this effort has been called extended producer responsibility, and has contributed to more environmentally sustainable designs of products and production processes. So far these trends are noticeable in Europe, China and Japan, e.g. with respect to take-back legislation with respect to automobiles and electronics. Further, para. 37 fails to mention that the advent of new sustainable designs ushers less toxic secondary materials that can be recycled and used by rapidly industrializing countries without the accompanying pollution.

For the above reasons, we suggest the following modifications to paras. 36 and 37:

36. Since the mid-1990's, there has been a gradual and significant policy shift in many countries, both Annex VII and non-Annex VII, away from a strong focus on regulation towards market driven opportunities. The deregulation trend has tapered down as failure in certain sectors covered by deregulation has become apparent. In the area of waste management, the new century has brought on a renewed focus on the polluter pays principle and its extension to post-consumer waste pollution – calling for manufacturer responsibility in the full life cycle management of their products or extended producer responsibility (EPR). One of the first applications of EPR was with automobiles, and now has captured one of the largest sources of post-consumer wastes – electronics. EPR provides a feedback mechanism that internalizes costs back to those first responsible for creating them. This mechanism leads to obvious economic incentives to drive cleaner production and greener products.

37. Rapidly industrializing countries have a growing demand for secondary raw materials to sustain the pace of their social and economic development. Unfortunately, in order fuel this growth these countries are forced to take in hazardous and other wastes together with the secondary raw materials that they require materials which in many instances need not be hazardous, and polluting were there more attention paid to hazardous use reductions upstream. In this context, there is a critical need for EPR as one tool to drive the development and application of environmentally sustainable designs of products and processes, and to build a capacity for the transfer of clean production technologies, and also for environmentally sound recovery or recycling of non-hazardous wastes.

Para. 38. There are key elements that are not mentioned in the future work, which we suggest should be included as new sub-paragraphs f and g:

f. Evaluation of the implementation experience of countries that have ratified Decision III/1.

g. Development of economic valuation of the health and environmental impact of hazardous substances.

Parte III. Compilación de las observaciones formuladas sobre esta cuestión durante el tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo de composición abierta

A. Extracto del informe del tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo de composición abierta respecto del análisis de las cuestiones relacionadas con el anexo VII

“57. The Working Group took up the item at its 6th meeting, on the afternoon of 28 April. In its consideration of the item, it had before it an analysis prepared by the Secretariat for the Group’s second session on issues related to Annex VII (UNEP/CHW/OEWG/2/7), a consolidation of comments received on the study during the period between the Group’s second and third sessions (UNEP/CHW/OEWG/3/INF/6) and a note by the Secretariat prepared for the current session on analysis of issues related to Annex VII (UNEP/CHW/OEWG/3/10).

58. The representative of the Secretariat introduced the documentation under the item and reviewed the work done to date. Noting that five Parties and one environmental non-governmental organization had provided comments on document UNEP/CHW/OEWG/2/7 during the inter-sessional period, she asked for further comments and guidance from the Parties so that the analysis could be finalized in time for the seventh meeting of the Conference of the Parties, as contemplated in decision VI/34 of the Conference of the Parties and decision OEWG-II/6.

59. There was considerable debate under the item. A number of representatives, one speaking on behalf of a regional grouping, said that the analysis contained in document UNEP/CHW/OEWG/2/7 should be finalized during the Working Group’s current session, in accordance with decision VI/34 of the Conference of the Parties. Those representatives repeatedly stressed that the point of the analysis, as stated in the preamble to decision VI/34, was to assist Parties to ratify the Ban Amendment contained in decision III/1, which they characterized as vital to the environmentally sound management of hazardous wastes in developing countries. The importance of the Basel Convention regional centres in regard to facilitating ratification and implementation of the Ban Amendment was highlighted.

60. A number of representatives drew attention to the enormous problems posed for developing countries by the massive new wave of exports of end-of-life equipment and pointed out the consequent importance of the Ban Amendment.

61. The representatives of two environmental non-governmental organizations criticized the draft analysis for presenting what they called an unrealistic picture of the costs and benefits to a country of ratifying the Ban Amendment. That, they said, would discourage developing countries from ratifying the amendment, which was arguably the most significant environmental achievement since the 1992 United Nations Conference on Environment and Development, and reflected an apparent effort on the part of some Parties to undermine the amendment. They argued that the analysis was unbalanced and did not serve its intended purpose.

62. Many representatives outlined proposed changes to the analysis and the draft decision contained in the note by the Secretariat, in the light of which the Working Group agreed to establish a contact group, chaired by Mr. Pavel Suian (Romania), with the task of reviewing how to deal with the comments submitted and preparing a draft decision on the item for the Working Group and elements for a decision by the Conference of the Parties. A number of representatives, noting the history of difficult negotiations under the item, argued that it was essential for the contact group to limit itself to those tasks and to avoid revisiting issues on which agreement had previously been reached or raising new issues.

63. The Working Group took up the item again at its 9th meeting, on the morning of Friday, 30 April, at which time it adopted a decision on the item on the basis of the draft contained in the relevant conference room paper. The decision as adopted is set out as decision OEWG-III/5 in annex I to the present report.

64. At the same meeting, the Working Group approved the text of a draft decision on the item for possible adoption by the Conference of the Parties at its seventh meeting on the basis of the draft decision contained in the relevant conference room paper. The draft decision as approved by the Working Group is contained in annex II to the present report.”

B. Observaciones formuladas sobre las cuestiones relacionadas con el anexo VII (Fase II) Presentada por Basel Action Network (BAN)¹² (Abril 2004)

General Comments

After many years of work and many hundreds of thousands of dollars spent in meeting costs on the Annex VII study, the result is a paper that *does not* assist the Parties to ratify the Ban Amendment as is its mandate. Indeed the document seems to be intent on doing the opposite.

As it stands now, the study suffers from bias and imbalance, with far more statements that appear to be critical of the ban than statements illustrating its obvious merits.

The mandate of the terms of reference for phase II of the Annex VII analysis states that “the purpose of this analysis is to explore, in a transparent, objective and comprehensive manner, health, environmental, social, economic and other issues related to Annex VII that are considered important to the Conference of Parties and to assist Parties to ratify the ban amendment.”

The requirements are clear that the exploration of the issues must be transparent, objective and comprehensive, and be included with a view to assist Parties in ratifying the Basel Ban Amendment. The present document fails the test of meeting fair standards of objectivity and comprehensiveness, and moreover is, on balance, not aimed to assist Parties to ratify the ban amendment.

One striking example is found at the very beginning of the document, where the list of issues regarding implementation of the Ban Amendment all contain negatives and no positives. This imbalanced portrayal belies the fact that in 2003 8 ratifications occurred for the Ban Amendment and one has already occurred in January of 2004. The amendment has been on a steady pace of achieving more than 5 ratifications per year and recently this average is seeing an increase. Compared with a similar instrument like the London Protocol (receiving 2.66 ratifications per year, thus far) that bans the dumping of industrial wastes at sea, the Basel Ban Amendment has received excellent support. Presently there are now 44 total ratifications in total. Surely, these 44 nations see something positive or have experienced something positive in ratifying and/or implementing the Ban Amendment. Most significantly the Annex VII countries that have implemented the Ban (including the entire European Union) have not had their very positive experience translated or communicated into the analysis. Wouldn't the experiences of those that have ratified the ban be vital with respect to the consideration of assisting parties to ratify the ban? So far the paper is lacking this vital information, and as such reveals a certain imbalance and lack of objectivity in contradiction to its mandate.

Another crucial point that continues to be bypassed is the economic costs on the environment and human health - the price tag for pollution. While there has been repeated mention of economic benefits from toxic waste, no recognition is made of the far greater costs that are hidden in medical costs, loss of arable land, fisheries, contamination of air, water, remediation costs, enforcement costs etc. Without this kind of economic assessment of these externalized costs the study lacks all credibility.

The comments that follow are consistent with the mandate to not consider new issues or attempt to raise new issues not already dealt with in the current analysis. The comments below are given to help steer the present analysis closer to what the terms of reference have originally called for in terms of balance, objectivity and with a view to assisting the parties to ratify the Ban Amendment.

¹² Revision of a previously submitted comment.

Specific Comments

III. A.

There is a need to mention the positive experiences of Parties who have ratified the Ban Amendment in this survey or summary of issues raised by Parties. Recently, the Ban has seen an increase in ratifications with 9 being deposited in the last 13 months. The Parties who have ratified the Ban Amendment have something valuable to contribute in the analysis, as to why they ratified, and the noted benefits of doing so. Thus, it is imperative to include such positive issues in order to arrive at a balanced and well-rounded analysis of the Annex VII issue. As this new text must be provided by those countries that have ratified and/or implemented the ban, we would request that those parties be asked to submit some observations about this experience before the text is finalized.

IV. B. 1.

Para. 13. This paragraph is incorrect in that some of the noted “principles” are in fact obligations of the Convention. The “proximity principle”, on the other hand, does not in fact exist in the Convention and is therefore not of significant standing in this paper. Further, despite the fact that the self-sufficiency principle and least transboundary movement principles are actually obligations of the Convention, it is incorrect to state these obligations so vaguely as: “recognizing that the application of those principles will vary from country to country.” Further, the statement, “...in some cases, however environmentally sound and efficient management of certain hazardous wastes may be achieved at specialized facilities located in another country”, flies in the face of the obligations of the Convention, and likely the Ban Amendment. Further, there is no recognition of Annex VII itself here which the analysis is supposed to be about. Annex VII was created to respect the special needs of developing countries as well as the special responsibilities of developed countries. Therefore, we strongly suggest that the text be dramatically altered to read as follows:

The Convention calls on all Parties to minimize the transboundary movement of hazardous wastes and to strive for national self-sufficiency in hazardous waste management. Thus there must be an effort to build capacity for such environmentally sound management in each country in order to reduce transboundary movements. Developed countries have a special role in this regard, vis-à-vis, developing countries.

Para. 14. The first sentence of paragraph 14 makes an assertion of fact, which we believe to be true, yet it is not supported by any citation of evidence or sources proving the factual claim. The study mentioned in the second sentence only examines zinc and lead, and would thus, fail to qualify as supportive of the previous assertion in the paragraph.

The statement in sub-paragraph (a) is fine. However, it discusses a percentage of the total zinc wastes traded that are in fact non-hazardous under the Convention and this bears no relation to sub-paragraph (b) which begins a discussion about competitiveness. In fact, sub-paragraph (b) doesn’t assert anything other than the fact that something “could” occur. The fact that something “could” occur in the future without evidence of its propensity to do so, is hardly relevant here, as the list of things that “could” occur, should they be cited in full would be a long list indeed.

For the foregoing reasons, we suggest that paragraph 14 be deleted as being unhelpful in fulfilling the mandate of the study.

IV. B. 2.

Para. 16. There is a significant logical flaw in the conclusion arrived at by the study as stated in the first sentence in this paragraph, as it misinterprets the requirements under the Basel Convention and Decision III/1. BAN had commented on this fact earlier in our comments on the consultant’s incorrect conclusion.

While the Convention imposes obligations on all Parties, Decision III/1, on the other hand, only calls for implementation on the part of Annex VII countries, namely those countries that are members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the European Union and

Liechtenstein. Thus, it is incorrect to assert that the countries that must implement the Ban Amendment have inadequate capacity or resources to do so. Rather, the Ban Amendment was designed precisely to place responsibility on countries that were certain to have all of the infrastructure and economic development to implement the ban. The thrust of the entire paragraph -- that countries lack the infrastructure, resources or legislative capacity to implement the ban, when only the OECD states must implement it, is an utter falsehood. The analysis with this faulty conclusion fails in fulfilling the terms of reference requirement of assisting parties in ratifying the Ban Amendment, as it regrettably discourages any ratification from occurring. For these reasons the paragraph should be deleted.

IV. B. 3.

Para. 17. Again this section is a discussion of the implementation of decision III/1 which only must be implemented by Annex VII countries. Therefore, we cannot understand the relevance of statements about the lack of capacity of non-Annex VII countries. As there is little revealed in this paragraph regarding OECD countries, we suggest deleting this paragraph. At the very least, all references to non-OECD countries should be deleted as the paragraph is meant to deal with implementing Decision III/1.

Para. 18. The discussion in the final three sentences refers to a matrix and a baseline. As this analysis is not meant to be a summary of other papers but a stand-alone document, we would suggest deleting the last three sentences of this paragraph.

Para. 19. Oddly there is no discussion here about the increase or decrease of hazardous waste flows from Annex VII countries to non-Annex VII countries as plotted over time. This is the most relevant data, as the ban is not designed to minimize other waste flows, only those from Annex VII to non-Annex VII. This data can also help Parties revisit the significance of the ban, which can ultimately assist them in ratifying the Ban Amendment. All other data are irrelevant to the issues concerning the ban and Annex VII.

Para. 21. The cautionary statement in para. 20 requires that the two cases cited in this paragraph be sufficiently described to highlight the particular nature of the cases to the country in which they were derived from. Having had the opportunity to look at the actual paper cited for the first case, BAN noted some objective details missing from the case summary. We suggest the following adjustments in order to more accurately reflect the paper in question:

One non-Annex VII country developed a lead recovery industry in the late 1980s due to the huge capital outlay needed to mine its lead deposits. In spite of an admitted lack of a national effort to collect domestic used batteries, the country made a determination that the national supply of lead through secondary sources was insufficient to ensure a viable and efficient use of the lead smelters. As a consequence, the country imported lead-acid batteries principally from a single source in an Annex VII country until 1994. As the lead recycling industry developed in this non-Annex VII country, lead poisoning in workers and the community around the recycling plants became commonplace. In fact, the rise in lead poisoning incidents and the hazards of such recycling plants prompted some regions in the same non-Annex VII country to shut down all used battery processing factories.

In the process of amending the environmental law, the legislative assembly of that country requested the banning of hazardous waste imports, with exception of used batteries, up to the year 2002. The exemption was based on the commonly used argument by the battery recycling industry that because the supply from domestic sources was insufficient to reach an economic production level, used batteries were needed to be imported until the local supply could satisfy the economic needs. Yet this argument was made in the absence of an adequate domestic collection system for locally generated waste batteries.

Meanwhile, the Annex VII country (principal source of used batteries) stopped its export of used lead-acid batteries, in line with decision III/1. Since 1998, the used batteries are imported principally from non-Annex VII countries. In the meantime, progress in encouraging and improving the collection of used batteries at the local level remain slow. In addition, small-scale recyclers which do meet the country's environmental and health requirements are still operating illegally.

BAN has not been able to find the source of the second case noted here. But given the experience in reading the actual cited case above, and comparing it to the analysis summary, we believe it would be prudent to allow the Parties to actually review this case. In order to arrive at a more transparent and objective summary of the case, BAN suggests that subparagraph (b) be placed in square brackets and remain open for modifications until the source for the case has been given to Parties for review, and for the Parties to weigh-in with comments on whether the case has been adequately summarized and whether its argumentation is sound.

IV. B. 5.

Para. 27. This paragraph largely claims that there is a lack of data regarding the health impacts from hazardous waste management operations. This is certainly not the case. There are numerous studies in existence. In fact several studies even exist which document health effects from the importation and subsequent handling and management of toxic waste. Some that come to mind are studies conducted in Cambodia following the importation of mercury-laden waste from Taiwan which included several deaths as a result. Likewise, imported mercury wastes caused the death of 2 workers at the Thor Chemical plant in South Africa. Studies of shipbreaking workers that have also been done evaluate health impacts and the prospective deaths from cancer from asbestos alone. It is vital that the Secretariat cite this existing and published information. Further, no relevance here with respect to illegal traffic and thus this sentence should be removed, particularly as it seems to imply that there are no health impacts from the legal traffic of hazardous wastes. Finally, the reference to an Annex III list of “wastes” is incorrect, as Annex III is a list of hazardous characteristics and not wastes.

IV B. 6.

Para. 29. Here it must be noted that ratification and implementation are two different things. In other words it is clear that while all Parties are urged to ratify the Ban Amendment, only the Annex VII countries are to implement it. The group of countries that were among the first to implement the Basel Ban was the European Union member states. Therefore, we propose that the EU experience and steps for implementation be reflected here. The EU experience can be well-documented, thus belying the assertion here that the information does not exist.

IV. B. 7.

Para. 32. Here the term “sham” recycling needs to be augmented. Sham recycling refers to recycling that is not really recycling at all. What is more often the case is “dirty” recycling – highly polluting operations. Thus we would recommend the formulation: “sham and dirty recycling”. Further, the final sentence in this paragraph is extremely misleading. The implication here is that only those that freely trade in waste might get access to newer and cleaner technologies. This is patently false. Everyone in the world has access to clean technologies if they are made available. There are no trade restrictions of any kind on clean technologies! This latter sentence needs to be scrapped.

Para. 33. This paragraph is extremely imbalanced and not objective. Suddenly the text is calling wastes “secondary raw materials”. These are “wastes” and in fact are hazardous or other wastes in the Basel context which are known to cause environmental harm when disposed or recycled. Nothing in this paragraph suggests why scrap and wastes migrate from Annex VII to non-Annex VII countries. This is quite amazing as it is a well-known phenomenon which spawned the Basel Convention itself. Hazardous waste migrates to take advantage of cheaper recycling labor, lack of environmental and occupational protections etc. found in developing countries or weaker economies. It is small wonder that the flows of wastes from Annex VII to non-Annex VII countries and not the other way around. The Basel Convention calls for self-sufficiency in waste management. This paragraph seems to have forgotten this obligation completely. Further, this paragraph implies that all that is necessary to allow the export of hazardous wastes from Annex VII countries to non-Annex VII countries is enhanced technology in the non-Annex VII country. However, regardless of technology levels, pollution is still transferred. What remains unanswered by technological “solutions” are the incentives to prevent waste in the first place, the fact that technology alone cannot guarantee levels of environmental and human health protection, and finally, the justice issue of allowing weaker economies to receive a

disproportionate burden of the world's waste simply because they are relatively poor. This paragraph is of such bias; it must be deleted.

New Para. 34 The contents in item 7 do not properly bear or coincide with the terms of reference it was intended to fulfill. The heading in Item 7 refers to an evaluation of the cost-benefit and effectiveness of hazardous waste recycling versus health risks and environmental damage, yet no mention is made of existing efforts in the international community to determine the environmental costs of the emissions of toxic substances. One such study was commissioned by the Nordic Research Council on the economic valuation of emissions of several toxic substances. In this regard, we suggest that the following paragraphs be inserted as a new paragraph 34, under item 7:

There have been efforts in placing economic values to the adverse environmental effects of toxic substances. One such effort was commissioned by one Annex VII country. It was designed as an aid to policy-makers in arriving at a rational decision on how to prioritize measures in curbing pollution from particular hazardous substances.

In determining the economic value for a particular substance, the study compiled recent weighting/ranking methodologies on the adverse impact of several substances, particularly their physical effects. The monetary values were based on surveys conducted by several Annex VII countries. From there the study developed a best, low, and high estimate of the environmental cost of a particular substance. An anchor substance was chosen in order to come up with an evaluation of the other substances. In this case, the study chose lead as the anchor substance due to its known effects, and for the numerous studies that have been carried out to assess the damage caused by its emissions.

Some of the resulting values of the study are:

Substance	Best estimate*	Low estimate*	High estimate*
Dioxin	2.2E+06	8.4E+05	6.0E+06
TBT	261	98	697
Chromium 6+	163	61	434
Mercury	111	41	296
PCB	96	36	256
Cadmium	32	12	87
Lead	6.1	2.3	16

* Prices are in Norwegian Kroner per gram.

Thus, if a 25,000 metric ton capacity/year lead-acid battery recycling plant operating in a non-Annex VII country, importing lead acid batteries has a 98% lead recovery rate, with 2% fugitive emissions, that means 500 tons of lead per year is being emitted in the vicinity of the plant. Applying the study values, based on the low estimate of NOK 2.3 per gram of lead emission, the low estimate would equate to an environmental cost of the 500 tons of lead emission as NOK 1,150,000,000 (US\$166,064,982) per year to the country where this particular plant is located. Under the best estimate the environmental cost would be pegged at NOK 3,050,000,000 (US\$440,433,213) per year.

The values presented under this study and others like it can greatly aid Parties in their analysis of the economic benefits and cost of hazardous substances. Too often these costs resulting from emissions and residues in even state of the art recycling operations are not calculated, and result in cost externalities and dramatic economic inefficiencies.

V. 8.

The title of this section and the content of paragraphs 34 and 35 have little to do with one another. What is needed here is an examination of how the Ban Amendment impacts waste minimization. We maintain that there is a strong correlation. Therefore we suggest the following paragraph.

New Paragraph for Section 8:

The ban, by closing off cheap and dirty options for waste management can force cost internalizations which in turn drive “green design” and thus hazardous waste minimization. One such example is found in the European Union which after ratifying and implementing the Basel Ban in 1997, was thereafter forbidden from exporting electronic wastes to weaker economies. As a result, the pressure to design for less toxics and recycling and enhanced collection became far more acute in Europe, in comparison to North America where a free trade in electronic wastes to non-Annex VII countries persists to this day. It is largely due to the closing-off of the export “escape hatch” that has pressed Europe into more rapidly adopting legislation to enhance European recycling of electronic waste and to phase-out toxic inputs to electronic products to ensure that such domestic recycling has less economic and environmental impacts within Europe.

VI.

Paras. 36 and 37. The pronouncements made in these paragraphs were more accurate for the period from the mid to the late 1990's than with the realities of the new decade. For the most part the global privatization trend has dissipated, and in its wake lies the ruins of the failure of deregulation in crucial industries. What paragraph 36 misses out on is that with the new century there have been increasing efforts globally to ratchet up corporate responsibility for their products through legislation. At times this effort has been called extended producer responsibility, and has contributed to more environmentally sustainable designs of products and production processes. So far these trends are noticeable in Europe, China and Japan, e.g. with respect to take-back legislation with respect to automobiles and electronics. Further, para. 37 fails to mention that the advent of new sustainable designs ushers in less toxic secondary materials that can be recycled and used by rapidly industrializing countries without the accompanying pollution.

For the above reasons, we suggest the following modifications to paras. 36 and 37:

36. Since the mid-1990's, there has been a gradual and significant policy shift in many countries, both Annex VII and non-Annex VII, away from a strong focus on regulation towards market driven opportunities. The deregulation trend has tapered down as failure in certain sectors covered by deregulation has become apparent. In the area of waste management, the new century has brought on a renewed focus on the polluter pays principle and its extension to post-consumer waste pollution – calling for manufacturer responsibility in the full life cycle management of their products or extended producer responsibility (EPR). One of the first applications of EPR was with automobiles, and now has captured one of the largest sources of post-consumer wastes – electronics. EPR provides a feedback mechanism that internalizes costs back to those first responsible for creating them. This mechanism leads to obvious economic incentives to drive cleaner production and greener products.

37. Rapidly industrializing countries have a growing demand for secondary raw materials to sustain the pace of their social and economic development. Unfortunately, in order fuel this growth these countries are forced to take in hazardous and other wastes together with the secondary raw materials that they require materials which in many instances need not be hazardous, and polluting were there more attention paid to hazardous use reductions upstream. In this context, there is a critical need for EPR as one tool to drive the development and application of environmentally sustainable designs of products and processes, and to build a capacity for the transfer of clean production technologies, and also for environmentally sound recovery or recycling of non-hazardous wastes.

Para. 38. There are key elements that are not mentioned in the future work, which we suggest should be included as new sub-paragraphs f and g:

- f. Evaluation of the implementation experience of countries that have ratified Decision III/1.*
 - g. Development of economic valuation of the health and environmental impact of hazardous substances.*
-